esa entidad (...) se le requiere para que remita a este Servicio de Consumo (...) en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de este requerimiento, copia de la contestación que sobre la misma se dé o haya dado al reclamante. La recurrente no ha atendido este requerimiento, por lo que ha infringido el art. 5.1 del R.D. 1945/83 de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, que recoge como infracción la negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere el presente Real Decreto, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de defectos de la construcción, sino de no haber contestado a un requerimiento efectuado, obstruyendo con eso la labor de inspección de consumo que tiene la Administración.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Francisca Sánchez Ordóñez, en representación de Inmobiliaria y Construcciones Renor 96, S.L., contra Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, y en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 1 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de alzada interpuesto por don José Javier Correro Casado, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída en el Expte. 01/215.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don José Javier Correro Casado, de la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido

practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a cuatro de marzo de dos mil tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Don José Javier Correro Casado formalizó escrito ante el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial, contra la entidad suministradora "TEDESA", por disconformidad con el importe abonado a dicha entidad de 6.549 ptas. en concepto de derecho de acometida y cuota de contratación correspondiente al domicilio sito en C/ Colón núm. 1, al entender que dichos derechos de acometida están incluidos en la factura de fecha 3 de octubre de 1995 e importe de 78.906 ptas.

Segundo. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz dictó la Resolución de referencia, por la que resolvió:

1. Declarar reglamentariamente correcta la factura de fecha 26 de noviembre de 1995 por importe de 6.549 ptas. correspondiente al suministro doméstico sito en C/ Cristóbal Colón, 1, calibre 15 mm y caudal 2 l/sg.
2. Proponer el archivo de la reclamación.

Tercero. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alega:

- Que el 3 de octubre de 1995 se abonó al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda los derechos de acometida para una "batería centralizada para seis contadores", correspondiente a la finca sita en C/ Colón núm. 1, núm. 18 (antiguo), núm. 1 actual, por importe de 78.906 ptas.
- Que posteriormente solicitó la conexión de agua para el local citado, abonando 6.549 ptas. por derechos de acometida y cuota de contratación, cuando ya fue abonado por el instalador.
- Que se trata de un error el cobro de esta última cantidad, puesto que ya fue abonada, además por ser cuota única, tal y como establece el Real Decreto 120/1991, de 11 de junio; que la Orden vigente que regulaba las tarifas de agua potable (Orden de 3 de febrero de 1994, publicada en BOJA núm. 17 de 12 de febrero) y el art. 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, no se recoge ningún concepto relativo a cuota de contratación, por lo que el Ayuntamiento no está facultado para el cobro de la misma.
- Defectos formales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Excmo. Sr. Consejero, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, el Decre-

to 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden de 18 de junio de 2001, artículo 3.4, por la que se delegan competencias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Los hechos son resumidamente los siguientes: En 1995 el reclamante paga unas setenta y ocho mil pesetas por el concepto de "derechos de acometida" para una batería centralizada para 6 contadores en la finca sita en C/ C. Colón, 18 (hoy núm. 1); un mes después solicita conexión de agua para C/ C. Colón, núm. 1 pagando 6.000 ptas. por "cuota de contratación" para una de las viviendas.

Pues bien, no tiene razón el recurrente, pues el art. 56 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, titulado "Cuota de contratación" que dispone que "Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de un suministro de agua a las Entidades suministradoras, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del contrato". La resolución pues resulta conforme a Derecho.

Tercero. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica,

RESUELVE

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José Javier Corroero Casado contra resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de fecha referenciada, manteniendo la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 1 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de alzada interpuesto por don Fernando Lozano Diáñez, en representación del Círculo del Opositor, SL, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Sevilla, recaída en el expte. CSM 197/01 AC.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente Círculo del Opositor, S.L., de la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede

a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, 31 de enero de 2003

Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Como consecuencia del acta levantada el día 16 de enero de 2001 por funcionarios de la Inspección de Consumo en el domicilio social de Círculo del Opositor, S.L., sito en C/ Valeriano Bécquer, núm. 66, Sevilla, se acordó la incoación de expediente sancionador por los siguientes hechos: En el modelo de contrato utilizado no se recoge el derecho del consumidor a la revocación en el plazo de siete días; no dispone de documento de revocación, y la empresa niega al consumidor la posibilidad de rescindir el contrato como consecuencia de esa infracción.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente prevista, el día 19 de septiembre de 2001 fue dictada la resolución que ahora se recurre, por la que se impuso a Círculo del Opositor, S.L., una sanción consistente en multa de mil quinientos dos euros y cincuenta y tres céntimos (1.502,53 euros), equivalentes a doscientas cincuenta mil pesetas, como responsable de tres infracciones leves (correspondiendo 601,01 euros, equivalentes a 100.000 pesetas, por cada una de las dos primeras y 300,51 euros, equivalentes a 50.000, por la tercera), por infracción de los artículos 3.1.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 3.2, 3.3, 3.4 y 5 de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, así como de los artículos 10 y 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tercero. Notificada la anterior resolución, don Fernando Lozano Diáñez, en nombre y representación de Círculo de Opositores, S.L., presenta un escrito, no calificado de recurso de alzada, en el que manifiesta su disconformidad con la sanción impuesta con base en las alegaciones que a continuación se resumen:

- Que el modelo de contrato tiene un anexo donde los alumnos firman la recepción del material y donde figura señalado el plazo de siete días que tienen para poder revocar el contrato.
- Que la entidad nunca ha negado la posibilidad de rescindir el contrato.
- Que la decisión de la Administración se basa en una actividad probatoria escasa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Aunque el escrito de impugnación no se presenta formalmente como recurso de alzada, de su tenor se deduce con claridad su carácter, por lo que puede calificarse y tramitarse como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.